TRIBUNAL DISTRITAL No. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL

Guayaquil, 15 de junio de 2021

CASO No. 18-18-IS

DOCTORA
KARLA ANDRADE QUEVEDO
JUEZ DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Quito.-

De nuestras consideraciones:

Los Doctores KELVIN P. SANCHEZ ROMERO, JORGE LUIS GUEVARA CARRILLO; y, FABIAN ROBERTO CUEVA MONTEROS, Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, en atención al Auto de Sustanciación de fecha 11 de junio del 2021, emitido por su señoría, notificado a los suscritos, vía correo electrónico con fecha 11 de junio del 2021, en atención a lo ordenado en el numeral 1 de dicho auto, el mismo que en su parte pertinente, indica: *“Notifíquese con el contenido del presente auto y con documento digitalizado de la demanda al Tribunal Distrital NO. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, a fin de que remita a este Organismo, un informe debidamente detallado y argumentado de descargo respecto del incumplimiento que se demanda y que motiva la presente acción. (..) 4. Para la entrega del informe y de los expedientes dispuestos en el presente auto, se le otorga a la judicatura mencionada el término de cinco días, contados a partir de la notificación del presente auto.(...)”*; en virtud de aquello; y, estando dentro del término concedido nos permitimos informar:

1.- Mediante auto de 17 de diciembre del 2009 (foja 287 vuelta del proceso), el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de aquella época, se inhibió de conocer la demanda, disponiendo que la secretaria relatora tan pronto se constituya en la Corte Provincial del Guayas, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, remita el expediente a dicho órgano judicial.

2.- E Actor, interpone Acción Extraordinaria de Protección, al auto inhibitorio dictado por los jueces de aquella época, en donde se observa que ratifica el casillero judicial No. 36 en la ciudad de Guayaquil **y señala el casillero constitucional No. 302 en la ciudad de Quito** para notificaciones.

3.- Con fecha 16 de marzo del 2016, la Corte Constitucional del Ecuador, dentro de la Acción Extraordinaria de Protección, **Caso No. 0540-10-EP**, propuesto por el Dr. Carlos Julio Emanuel, emitió la Sentencia No. 081-16-SEP-CC, la misma que en su parte pertinente dice: *“1. Declarar vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 75 de la Constitución de la República. 2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada. 3. Como medidas de reparación integral se dispone: 3.1. Dejar sin efecto los autos del 17 de diciembre de 2009 y 20 de enero del 2010, emitidos por los jueces del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, dentro del juicio de indemnización por error*

judicial No.904-2009-2. 3.2. Retrotraer el proceso hasta antes de la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva; en consecuencia, devuélvase el proceso original al Tribunal No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil para que continúe la sustanciación del juicio propuesto por el doctor Carlos Julio Emanuel Moran.” (el resaltado es fuera de texto)

4.- El 1 de octubre del 2013, los suscritos jueces Drs. Kelvin Sánchez Romero, Jorge Luis Guevara Carrillo y Fabian Cueva Montero, nos posesionamos como jueces de éste Tribunal.

5.- Con auto de 19 de abril del 2016, que obra del proceso a foja 356, éste Tribunal avocó conocimiento de la causa y en atención a que la Corte Constitucional, resolvió retrotraer el proceso hasta antes de la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, es decir al auto con los cuales los jueces que actuaban en aquella época, se inhibieron de conocer la causa, correspondía calificar la demanda; **no obstante de aquello, éste Tribunal al revisar el libelo, encontró que no era claro; por lo tanto, conforme el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispuso que el actor en el término de cinco días, aclare su demanda, auto que fue notificado a la casilla judicial que indicó el accionante en el libelo inicial de su demanda.**

6.- En ese orden y en atención a que el accionante no completó la demanda en el término concedido (cinco días) con auto de 2 de mayo del 2016, se dispuso el archivo de la causa, conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que dispone expresamente lo siguiente: **“Art. 32.-Si la demanda fuere oscura, irregular o incompleta, el Magistrado de Sustanciación (sic) ordenará que el actor la aclare, corrija, concrete o complete, en el término de cinco días; y si el actor no lo hiciere, rechazará la demanda. El decreto respectivo será notificado al interesado y a las autoridades demandadas. El actor podrá pedir una prórroga prudencial del término, que no excederá de ocho días, salvo que por circunstancias especiales que se invoquen proceda a conceder una mayor.”** (el énfasis es del Tribunal).

7.- Con estos antecedentes, es claro a la luz de la lógica que éste Tribunal, no ha incumplido la sentencia de la Corte Constitucional, por cuanto lo que se dispuso fue que el actor aclare su demanda conforme lo determina el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, habiendo sido el accionante notificado en legal y debida forma en la casilla judicial que había designado en su demanda, situación que no ocurrió lo que dio lugar a que se ordene el archivo de la demanda, conforme así lo dispone expresamente el artículo 32 de la Ley ibídem.

8.- Posteriormente el demandante, con diferentes escritos presentados, indicó que no tuvo conocimiento del auto de 16 de marzo del 2016, donde se le disponía que aclare su demanda, aduciendo que el abogado que lo patrocinaba y propietario de la casilla judicial No. 36, había fallecido, **el 12 de enero del 2014**, es decir cuando la presente causa, se encontraba en la ciudad de Quito, en la Corte Constitucional por la acción extraordinaria de protección planteada, requiriendo que se revoque el auto de archivo, sin embargo no era procedente por cuanto el recurso de revocatoria, solo es posible procesalmente, conforme lo determina el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil que dispone: **“Los autos y decretos pueden aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse, por el mismo juez que los pronunció, si lo solicita**

alguna de las partes dentro del término fijado en el Art. 281”; y ese término corresponde a tres días: “El juez que dictó sentencia, no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro de tres días.” (el énfasis es fuera de texto); en la especie, el actor mediante escrito de 27 de julio del 2016 (foja 363), solicitó revocatoria del auto de 2 de mayo del 2016 (foja 358), en este caso fuera del término establecido, por tanto lo que peticiona se tornaba en improcedente; además el Tribunal se pronunció también respecto al caso fortuito alegado en el sentido de que uno de sus abogados había fallecido, al respecto se consideró que lo alegado por el accionante no era procedente por cuanto, de la revisión del expediente, se observó que el actor estuvo patrocinado por dos profesionales del derecho, que señaló casilla constitucional en la ciudad de Quito, donde se le notificó lo resuelto por la Corte Constitucional; por tanto, al haber fallecido uno de sus dos abogados dos años antes de que la Corte Constitucional emita su fallo, fue su obligación oportunamente señalar una nueva casilla judicial o correo electrónico, conforme así lo determina el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil vigente en aquella época, que disponía: *“Si por apelación u otro motivo, se remitiere la causa a distinto lugar, harán las partes, ante el juez a quo o ante el superior, la indicación prescrita en el Art. 75 bajo el apercibimiento que dicho precepto contiene”*; en tanto, conociendo el actor que uno de sus abogados patrocinadores había fallecido y en consideración a que el proceso se encontraba en la ciudad de Quito, en la Corte Constitucional, debió señalar una nueva casilla judicial tal como lo señala la norma antes descrita, tomando en cuenta que la resolución emitida por la Corte Constitucional, se produjo dos años después de la muerte de uno de sus defensores técnicos; en ese sentido el caso fortuito alegado, no reunía las características determinadas en el artículo 30 del Código Civil, por cuanto no es algo imprevisto al que no es posible resistir, sino que se debió, a la negligencia del demandante al no señalar como era su obligación, nueva casilla judicial.

Particular que nos permitimos informar para los fines legales pertinentes.

Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en nuestros correos electrónicos kelvin.Sanchez@funcionjudicial.gob.ec kelvinsa1@hotmail.com, Jorge.Guevara@funcionjudicial.gob.ec y fabian.cueva@funcionjudicial.gob.ec

Atentamente,

Dr. Kelvin Sánchez Romero
Juez Distrital

Dr. Fabian Cueva Monteros
Juez Distrital

Dr. Jorge Luis Guevara Carrillo
Juez Distrital